



INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS, DENOMINADO “GESTIÓN DE PISO ESPECIALIZADO EN MENORES MUJERES TUTELADAS SUSCEPTIBLES DE SER VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EXPLOTACIÓN SEXUAL Y POSIBLES TESTIGOS PROTEGIDOS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIAS Y NATALIDAD (5 PLAZAS)”

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este contrato se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones:

Los menores con medidas de protección de Guarda o de Tutela acordadas por la Comisión de Tutela del Menor están acogidos por la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad en Centros Residenciales que, bien son propios y son gestionados directamente por la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, o bien son contratados y están gestionados por Entidades privadas.

La **Convención de los Derechos del Niño y de la Niña del año 1989** les reconoce como sujetos de derechos y les hace merecedores de una especial protección.

Concretamente, en su **artículo 19** se establece que los Estados Partes *adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.*

Estas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

El artículo 34, a su vez, recoge que los Estados Partes se comprometen a proteger al niño **contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.**

Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

- a) ***La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;***
- b) ***La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;***
- c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

De acuerdo con el artículo 35 también tomarán *todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma y en el artículo 36 se declara la protección del menor contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.*



Asimismo, los Estados Partes adoptarán todas las *medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño* (artículo 39).

Es además una materia objeto de especial atención desde el prisma de la normativa europea, recogiendo la **directiva Europea 36/2011** apartados y medidas concretas en relación a los menores de edad y su condición de víctima de trata, **instando la creación de recursos adecuados para su atención.**

La trata de menores constituye un caso especial de trata de seres humanos según se define en el Convenio del Consejo de Europa sobre trata. Con arreglo al artículo 4, párrafo c, la captación, el transporte, el traslado, el alojamiento o la acogida de un niño o de una niña (que se define como una persona de menos de dieciocho años) con fines de explotación tendrán la consideración de trata de seres humanos, aunque no apelen a ninguno de los medios enunciados en párrafo (a) del artículo 4.

En el marco legislativo propio, el **art. 39 de la Constitución Española** establece que:

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la Ley con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su estado civil. La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.
4. *Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.*

La Comunidad de Madrid es también la Entidad Pública responsable de las competencias en materia de menores, dentro de su ámbito territorial, conforme al **artículo 148.1 de la Constitución Española** que atribuye a las CCAA la facultad de asumir competencias en materia de asistencia social, junto con lo dispuesto en el **artículo 10.3 de Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, en su redacción dada por el artículo primero, apartado cinco de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 6/1995 de Garantías y Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.**

La Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad asume las competencias, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en materia de protección de los menores en situación de desamparo y con ello a través de la Comisión de Tutela, se adoptan las medidas de protección necesarias para su guarda.

La trata de seres humanos es reconocida como una forma de violencia que afecta a las mujeres de manera desproporcionada, pues mujeres y niñas son sus principales víctimas y porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual. Se calcula que anualmente alrededor de 4 millones de personas son víctimas de trata en el mundo, de las cuales el 80% son mujeres y niñas y en el 50% de los casos son menores. En la gran mayoría de los casos la trata de personas se destina a la explotación sexual a través de la prostitución.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), **casi un tercio de las víctimas de trata es menor de edad.** Este dato contrasta con los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, que muestran que entre 2013 y 2017 fueron detectadas cerca de 100.000 personas en situación de riesgo de ser víctimas de trata. Sin embargo, finalmente solo fueron reconocidas como tales 1.097, de las cuales, **únicamente se tuvo constancia de 67 menores de edad.**



Lo que demuestra este dato es la rápida mutación y ocultación del fenómeno, ya que las redes de trata se adaptan continuamente a las nuevas rutas y flujos migratorios, a la vez que modifican sus métodos de captación y perfeccionan sus técnicas de manipulación y coacción para asegurarse el control de las víctimas así como a la dificultad de detectar la situación, especialmente, en menores, a pesar de la encomiable labor llevada a cabo por todos los agentes implicados y los protocolos y herramientas disponibles en la Web del Ministerio de Interior.

La Comunidad de Madrid ha sido pionera en la lucha contra la violencia de género, implantando servicios de atención para víctimas de trata ya desde el año 2007, a raíz de la aprobación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que, además de la violencia de pareja o ex pareja, que recoge como supuestos intolerables que también dan forma a la violencia de género: la mutilación genital femenina, el acoso sexual, las agresiones y abusos sexuales contra las mujeres, **la trata de mujeres con fines de explotación sexual o la inducción a una mujer a ejercer la prostitución.**

La **Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual 2016-2021**, aprobada el 18 de julio de 2016 pretende sistematizar las actuaciones a desarrollar en relación con las líneas estratégicas contempladas en el **Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018** y con el fin de trabajar en la eliminación de esta forma de violencia de género.

La realidad actual de las menores en la Comunidad de Madrid hace que en ocasiones aparezcan perfiles de menores **que podrían estar incursos en redes de prostitución e incluso de trata de mujeres.**

Mujeres y niñas son las principales víctimas de la trata, por tanto, debe prestarse especial atención a la **dimensión de género en el abordaje** de la lucha contra la trata de seres humanos, así como a la edad como un factor de vulnerabilidad en la captación, y para atender eficazmente a las necesidades específicas de las víctimas.

Esta realidad **responde a unos perfiles muy concretos y requiere de una atención y conocimientos especializados en la materia, tanto para su posible detección, como para el trabajo a realizar con estos menores, en su mayoría niñas, que según los casos pudieran estar sujetos incluso a amenaza y/o coacción.**

Es voluntad de la Comunidad de Madrid poder **atender adecuadamente** a estas menores, de manera que no solo se pueda detectar la posible situación de víctima de explotación sexual sino que, en su caso, **la menor pueda recibir la ayuda profesional más adecuada a su situación, tanto física como psicológica.**

Es necesario dar respuesta a esta especial situación de desamparo que pueden sufrir estas menores y para ello, la Administración debe de contar con todos los recursos que estén a su alcance, entre ellos, aquellas Asociaciones y/o Entidades especialmente sensibilizadas y formadas en la materia que nos ocupa.

La red de centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid está compuesta por centros de carácter abierto, sin medidas extraordinarias de seguridad, por lo que, en ocasiones de grave riesgo para la menor (que pudiera estar amenazada o en peligro por estar inmersa en alguna de las redes de explotación o trata que se detecten), **la Red de Centros de Protección no está preparada para atender esa necesidad**, que además puede suponer un riesgo añadido para el resto de menores. Por ello, resulta de especial importancia poder contar con la posibilidad de derivar el cuidado y atención de la menor en un primer momento y en tanto se valora la posibilidad de integración en condiciones de seguridad en un centro con otros chicos y chicas de su edad.



El Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, adoptado mediante acuerdo de 28 de octubre de 2011 por los Ministerios de Justicia, del Interior, de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Consejo del Poder Judicial, actualmente en vigor, señala las distintas fases por las que atraviesa una posible víctima de trata desde su detección, indica las actuaciones a llevar a cabo en cada fase e identifica a las administraciones públicas implicadas, estableciendo los mecanismos de coordinación entre ellas y su relación con otras organizaciones con experiencia acreditada en la asistencia a víctimas.

Este protocolo contempla específicamente la **situación de menores incurso en posible trata o explotación sexual**; el Anexo al mismo que se aprobó recientemente en una Reunión del Observatorio de Infancia denominado “Actuaciones para la detección y atención de víctimas de Trata de Seres humanos (TSH) menores de edad”, contempla el traslado de estos menores al **“recurso residencial más adaptado a sus necesidades” con personal con “formación especializada en la detección y tratamiento de víctimas de TSH”**. En concreto el apartado 6.3 del citado anexo establece que *“una vez identificada la víctima de TSH menor de edad, la Entidad Pública de Protección de Menores acordará de manera prioritaria el traslado a centros específicos con recursos personales y materiales especializados”*

Además, respecto a menores, el *Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados* aprobado mediante Resolución de 13 de octubre de 2014, y publicado en el BOE de 16 de octubre de 2014 y en el que tuvo una participación activa en su elaboración la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad (entonces Instituto Madrileño de la Familia y el Menor) recoge recomendaciones y actuaciones concretas en los casos de posible víctima de trata y/o explotación sexual, entre ellas, **la opción de recursos especializados**.

La Comunidad ha publicado la Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual 2016-2021 y cuyo **OBJETIVO 3** recoge las medidas dirigidas a la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad: víctimas de trata con fines de explotación menores de edad, mujeres con discapacidad física y/o psíquica, problemas de salud mental, drogodependencia, mujeres con menores a cargo y siendo **la medida 3.1 la creación de un centro de acogida para la atención a menores víctimas de trata**.

El recurso cuya gestión se licita es el que da cumplimiento al mandato de esta Estrategia y teniendo en cuenta estas competencias y careciendo de medios propios suficientes y adecuados, en virtud del art.131 de la LCSP, se debe acudir a la licitación de un contrato de servicios, cuyo objeto consiste en el acogimiento temporal de menores que pudieran estar incurso en una red de trata con fines de explotación sexual y, una vez tuteladas, requieran ser atendidas por un servicio especializado y con determinadas medidas de reserva y seguridad en atención a su posible situación de testigo protegido, con cargo a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad.

La guarda residencial de estas menores comprenderá no solo la satisfacción de sus necesidades materiales sino todo el apoyo psicológico que la menor pudiera requerir, así como el acompañamiento y asesoramiento en los posibles trámites judiciales y de otro tipo que pudiera derivarse de su posible inclusión en la red de trata.

Además, se velará por su adecuada integración social y educativa facilitándole la formación o el acceso a ella en condiciones de seguridad en función de cada caso.

Por ello, es un recurso con una clara vocación de transitoriedad, en tanto se puede realizar el paso del menor, en condiciones de seguridad, a un centro de la red ordinaria de protección de menores donde poder desarrollarse en condiciones de igualdad con otros menores de su edad.



Con el objeto del contrato se están cumpliendo los principios que rigen la contratación pública, fundamentalmente, los **principios de igualdad y no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia**.

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la contratación citada anteriormente.

Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIAS
Y NATALIDAD

Fdo.: Ana Sastre Campo

